

Saludos,

Mi nombre es Cindy Prizio. Soy directora ejecutiva de One Standard of Justice (OSJ), una organización de derechos civiles sin fines de lucro establecida en 2015. OSJ está compuesta por voluntarios que trabajan en nombre de personas acusadas o condenadas por un delito sexual y sus familias.

Durante los últimos 8 años, es posible que hayamos hablado por teléfono o nos hayamos conocido en persona. OSJ ofrecerá más oportunidades para conocernos a mí y a nuestros dedicados voluntarios este año. Tenemos tres reuniones programadas para diciembre. Durante un refrigerio ligero, lo ayudaremos a familiarizarse con OSJ, los recursos que brindamos y cómo puede mantenerse informado o ayudar con nuestro trabajo vital. Todos están invitados y animados a asistir*, sus seres queridos y amigos también son bienvenidos (por favor, nadie menor de 18 años).

**Si está bajo supervisión, tenga en cuenta que puede haber personas que hayan sido condenadas por un delito sexual o que también estén bajo supervisión en las reuniones. Siga las condiciones de su supervisión que pueda tener con respecto a dichas reuniones.*

DIC 2 - 10:30 AM – 12:30 PM - New Britain Public Library, 20 High St., **New Britain**, CT 06051

DIC 2 - 2:00 PM – 4:00 PM - Silas Bronson Library, 267 Grand St., **Waterbury**, CT 06702

DIC 9 - 1:30 PM – 3:30 PM - Community Health Center**, 675 Main St., **Middletown**, CT 06457

*** Por favor, no se puede estacionar en los lotes del Community Health Center.
Parking gratis limitado 34 Rapallo Ave. o hay que pagar en la calle (\$0.25/15 min).*

Junto con esta carta hay un boletín que destaca parte del trabajo importante de OSJ y de información que puede beneficiarlo a USTED ahora. Lo más importante es que muchos de ustedes pueden ser elegibles para solicitar un indulto ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional de CT (CT Board of Pardons and Paroles).

También hemos incluido una muestra de un artículo destacado de Jaden Edison del CT Mirror sobre la campaña legislativa de 2023 de OSJ, Pagado en su totalidad. El artículo destaca nuestra lucha contra el Registro vista a través de la lente de las personas en el Registro y sus familiares. Yo, en nombre de OSJ, he comenzado una serie de artículos de opinión, también publicados por CT Mirror. Puede leer ambos artículos, *Time to Reform the Registry* y *Who has hijacked Halloween?* aquí: CTMirror.org/author/cindy-prizio-opinion-contributor/

OSJ puede lograr mucho más consigo a nuestro lado. Debemos unirnos en conocimiento, si no en persona. Visite nuestro sitio web para contactarnos (OneStandardOfJustice.org/contact-us/) y proporcione su dirección de correo electrónico para que podamos mantenerlo informado sobre nuestro trabajo más fácilmente. Compartir información con usted por correo es costoso, especialmente para una organización con un presupuesto limitado. Si no puede utilizar nuestro sitio web, también podemos comunicarnos con nosotros por teléfono al (203) 680-0567. Actualmente, una devolución de llamada puede tardar hasta dos semanas.

Atentamente,

Cindy Prizio

Defensora humana
y directora ejecutiva, *One Standard of Justice*



OneStandardOfJustice.org/donate/

Tenga en cuenta que One Standard of Justice (OSJ) NO es una firma de abogados, no somos abogados y no estamos autorizados ni tenemos licencias para dar asesoramiento legal. Nada de lo contenido en esta correspondencia pretende constituir asesoramiento legal y cualquier información o referencia que se encuentre aquí o en nuestro sitio web no se debe utilizarlo como sustituto del asesoramiento de un abogado competente.

Acción legislativa del OSJ para eliminar personas del registro

En la sesión legislativa de 2023, OSJ llevó a cabo la campaña legislativa **Paid in Full** para aprobar la SB1194, un proyecto de ley para liberar del Registro a personas que fueron incluidas retroactivamente en 1998. Nuestro proyecto de ley fue aprobado en el Senado con amplio apoyo de los líderes y miembros de Ambos partidos políticos. A pesar de este apoyo bipartidista, el proyecto de ley se estancó en la Cámara después de ser presentado por un PT (aprobación temporal).

La campaña Pagado en su totalidad se llevará adelante en la próxima sesión legislativa. OSJ seguirá luchando para aprobar esta legislación y dar alivio a cientos de personas. Puede obtener más información sobre nuestra campaña en nuestro sitio web: OneStandardOfJustice.org/paid-in-full/

Litigio OSJ para eliminar restricciones de presencia

OSJ junto con John Doe presentaron una demanda para eliminar la ordenanza de zona de “seguridad infantil” de Bristol. Ordenanzas inconstitucionales como estas no tienen ningún beneficio para la seguridad pública o infantil, al tiempo que causan un gran daño a los hijos de los padres afectados. Esta es la segunda ciudad después de Windsor Locks que optó por revocar la ordenanza en lugar de proceder a un juicio. Como resultado directo, John Doe pudo asistir a la graduación de la escuela secundaria de su hijo. Esta fue una gran victoria personal para él y para otros padres impactados de Bristol que ya se han visto obligados a perderse muchos de los hitos de sus hijos, como los primeros días de escuela, graduaciones, eventos deportivos y otras actividades. Windsor Locks fue la primera ciudad en revocar su ordenanza en 2019.

OSJ planea presentar demandas adicionales para eliminar las ordenanzas zonales de “seguridad infantil”. Todavía hay nueve ciudades en Connecticut con una ordenanza de “seguridad infantil”, y otra ciudad está tratando de aprobar una nueva ordenanza. OSJ no descansará hasta que todos los ciudadanos de CT estén libres de leyes tan dañinas e ineficaces.

Si es ciudadano de Danbury, Ansonia o Naugatuck y desea participar en una queja de John Doe para eliminar la ordenanza sobre la zona de seguridad infantil en su ciudad, comuníquese de inmediato:

OneStandardOfJustice.org/contact-us/

OSJ reanuda *Fearless* grupo de apoyo

En el primer cuarto de 2024, OSJ reanudará nuestro grupo de apoyo emocional, *Fearless*, tanto de forma virtual como presencial. Este programa es para personas acusadas o condenadas por delitos sexuales y sus familiares y amigos. El bienestar de todas las personas afectadas por el Registro es esencial. OSJ recibe llamadas diariamente sobre el daño que se está causando a esta comunidad a través de problemas sistémicos como mala conducta procesal, supervisión comunitaria, tratamiento, vivienda y barreras laborales. *Fearless* comenzará virtualmente en enero/febrero. La información y las instrucciones sobre cómo participar se enviarán por correo electrónico y se publicarán en nuestro sitio web:

OneStandardOfJustice.org/fearless/

Los indultos son posibles

La Junta de Indultos y Libertad Condicional ofrece un indulto absoluto, que incluye la eliminación de todos los antecedentes penales y la eliminación del registro para aquellos que califican. Los solicitantes pueden presentar su solicitud a partir de cinco años después de la fecha de condena y deben estar fuera de la supervisión comunitaria.

Si está interesado en obtener más información sobre posibles indultos, complete nuestro formulario de interés en indultos:

OneStandardOfJustice.org/pardon-interest/

Victoria de la Primera Enmienda en CT

Un tribunal de distrito federal en el caso *Cornelio v. State of CT* determinó que la ley de CT que exige que las personas obligadas a registrarse informen a la policía de sus direcciones de correo electrónico y de todos los demás “identificadores de Internet” viola la Primera Enmienda. La decisión aplica sólo para Cornelio. OSJ está dando seguimiento a un caso de demanda colectiva para brindar alivio de este requisito a todas las personas inscritas en el Registro en CT. Lea más al respecto y encuentre la decisión completa aquí: OneStandardOfJustice.org/cornelio-v-ct/

¿Cómo puede hacer una diferencia?

VOTACIÓN

TODOS LOS CIUDADANOS DE CT NO ENCARCELADOS TIENEN DERECHO A VOTAR, ya sea una persona con una condena por un delito grave, anteriormente encarcelado, actualmente en libertad condicional o en libertad condicional. Votar es la forma más directa de hacer oír su voz. Si aún no está involucrado en las elecciones de gobiernos locales y estatales, le pedimos que salga y VOTE.

Portal.CT.gov/-/media/sots/ElectionServices/Misc/TheUltimateFreedompdf.pdf

DONE Y / O VOLUNTARIO

Si le gusta nuestro trabajo, muéstranos su apoyo haciendo una donación para que podamos seguir creciendo y brindando más servicios. ¡O uniéndose a nosotros como voluntario!



OneStandardOfJustice.org/donate/



OneStandardOfJustice.org/volunteer/

La nueva legislación permite enviar cartas de verificación de dirección por fax o correo electrónico

SB969, subsección (c), agrega “facsimil o correo electrónico” a los métodos aceptados para devolver cartas de verificación. El texto completo de la nueva legislación se puede encontrar en el sitio web de la CGA.:

CGA.CT.gov/2023/ACT/PA/PDF/2023PA-00193-R00SB-00969-PA.PDF

Gratis y rápido, el fax o el correo electrónico generan una actualización generalmente el mismo día. Como usted sabrá, o lo habrá experimentado de primera mano, las cartas de verificación a menudo llegan tarde, no se reciben de Middletown y nos encontramos persiguiendo cartas enviadas por correo, lo que resulta en incumplimiento o violación, lo que puede llevar a un arresto.

OSJ ha elaborado una guía sobre cómo enviar su verificación por fax a Middletown usando su computadora. Se puede encontrar aquí: OneStandardOfJustice.org/fax-verification/

Read the full article at: CTMirror.org/2023/09/10/ct-sex-offender-registry-law-advocates/

‘Just existing, not living’: CT residents retroactively added to sex offense registry seek reprieve

Twenty-five years after Connecticut required them to register as “sex offenders” ex post facto, they hope the legislature will soon take action

by **Jaden Edison**

September 10, 2023 @ 5:00 am

During counseling programs he’s attended throughout adulthood, Aaron Kearney has been told not to let mistakes define him and not to let the past hijack his future. But for a quarter-century, the 52-year-old has worn a label making it burdensome to live up to those ideals: “registered sex offender.”

“The only thing I feel is that I’m just existing. I’m not living,” said Kearney, on a recent windy Thursday at Bridgeport’s St. Mary’s-by-the-Sea, sitting at a picnic bench with the Long Island Sound as his backdrop. “At the end of the day, you should have sentenced me to death.”

The Bridgeport native never imagined that his name would live on the state’s public sex offense registry for the world to see. The Connecticut Mirror could not locate records outlining specific details in his case, but available documents show he was charged in 1997 with third-degree sexual assault for what he describes as assaulting a sex worker. Promptly after, he pleaded guilty and served eight months in prison.

Months following his release, however, Kearney received notification that Connecticut had recently enacted legislation creating the public registry. The new policy, approved during the 1998 legislative session (<https://www.cga.ct.gov/ps98/Act/pa/1998PA-00111-R00SB-00065-PA.htm>), was retroactive, meaning people convicted of a “sexually violent offense” in the decade prior to the law’s passage would have to enroll.

Whether or not the person had served time, sexually reoffended or posed a serious risk was insignificant under the new law. That wasn’t the end of it for Kearney. The state first required people convicted of a violent sex offense to register for at least a decade, where a court would grant them relief if they could prove they weren’t likely to reoffend. But in 1999, the legislature amended the law (<https://www.cga.ct.gov/ps99/Act/pa/1999PA-00183-R00HB-06785-PA.htm>), extending the enrollment mandate to a lifetime.

Twenty-five years later, Kearney is among hundreds of Connecticut residents still affected by the law’s retroactive provision. Faced with decades of adversity emanating from their status on the registry, many of them are pleading with legislators to fix what they feel was a far-reaching violation of their right to due process and an indifference to their humanity.

The registry “didn’t exist. I did not plead to it. I did not say I accept or reject,” Kearney said. “I didn’t even have the chance. And in this country, that’s not the law.”

Public sex offense registries (<https://www.apmreports.org/story/2016/10/04/sex-offender-registries-wetterling-abduction>), which reveal information ranging from one’s apartment floor to the bodily location of their tattoos, materialized in response to a number of highly publicized child abductions in



the 1980s and 1990s — notably Adam Walsh, 6, in Florida, Megan Kanka, 7, in New Jersey, and Jacob Wetterling, 11, in Minnesota. Though states had already established (<https://ctmirror.org/2018/05/21/sex-offender-registry-harm-good/>) sex offense registries, only law enforcement agencies had access to them.

Now most people convicted of sex offenses, from public indecency to first-degree sexual assault, are subject to public registration requirements with few exceptions. In Connecticut, the mandate lasts for either 10 years or a lifetime, depending on whether the charge was nonviolent or violent. Having one's name on the registry has made it all but impossible to maintain jobs, housing and relationships, experts say.

Furthermore, research shows (<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/lsi.12189>) that policies passed in response to sex crimes have disproportionately affected Black men like Kearney, who in Connecticut comprise more than a quarter of people on the registry, according to a CT Mirror analysis.

Trevor Hoppe, a sociology professor at the University of North Carolina Greensboro who studies the intersection of race and the registry, doesn't think it's a coincidence given all that the country has invested into protecting white children.

"Under that veil, I think lawmakers have been able to pass all sorts of deeply punitive policies that impact way more than just people who commit crimes against children," Hoppe said.

When Connecticut's law was enacted, it was "designed to protect its communities from sex offenders and to help apprehend repeat sex offenders," former U.S. Supreme Court Chief Justice William Rehnquist once wrote (<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/538/1/>) in a case reviewing whether the Constitution afforded people a right to a hearing prior to their placement on the registry.

During this year's legislative session, both Democrats and Republicans voted against legislation that would have removed people retroactively added. Their objections rested on the belief illustrated by Rehnquist and others — that the database works as an effective tool for maintaining public safety because it helps hold dangerous people accountable.

"If you commit that crime, that is your scarlet letter. People should know that, so they can make a well-informed decision on whether or not they want to leave their children around you," said Rep. Tammy Nuccio, R-Tolland, in an interview with the CT Mirror. "The fact that people want to take that tool away from me is pretty damn ridiculous."

But academics who conduct extensive research on sexual violence and public registries across the country offer a more nuanced perspective, noting the difference between community perceptions of safety and reality.

If a person has lived 15 years without reoffending sexually, the odds of them reoffending are no greater than those formerly incarcerated for non-sex crimes, said Elizabeth Jeglic, a licensed clinical psychologist and a professor at John Jay's College of Criminal Justice in New York.

"What we know is that the registry currently does not work," Jeglic said, adding that most crimes against children are perpetrated by someone they know...

Article continues at: CTMirror.org/2023/09/10/ct-sex-offender-registry-law-advocates/